

BOLETIN OFICIAL.



PROVINCIA DE ORENSE.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (Q. D. G.) con-
cedió en este día sin nove-
dad en su importante salud.

La Serma. Sra. Princesa de
Asturias, y las Sermas. Seño-
ras Infantas Doña María del
Pilar, Doña María de la Paz y
Doña María Dolores, y los Se-
ñores Duques de Montpensier,
continúan sin novedad en su importante sa-
lud.

El Sr. D. Juan de los Rios,
Secretario de Estado.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES ORDENES.

Remitido al informe del Con-
sejo de Estado el expediente
promovido entre el Ayunta-
miento del Puerto de la Cruz
de Orotava y la Sociedad de-
nominada *Las Aguas* en solici-
tud de que se aprobase el con-
trato celebrado entre ambas
partes para la conduccion de
aguas a la poblacion, la Sec-
cion de Gobernacion de dicho
alto Cuerpo ha emitido el si-
guiente dictamen:

«Excmo. Sr. Para los efec-
tos de la regla 2.ª, art. 80 de la
ley municipal, se ha elevado
al Ministerio del digno cargo
de V. E. el contrato proyecta-
do entre el Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz de Orotava
(Canarias) y la Sociedad deno-
minada *Las Aguas* sobre el mo-
do de utilizar las que corres-
ponden al abasto público».

Habiéndose resuelto de con-
formidad con lo propuesto por
la Seccion por Real orden de
11 de Junio último el expedien-
te instruido con motivo de las

diferencias surgidas entre la
corporacion y la empresa, esta
última en junta general cele-
brada el 6 de Julio siguiente
dió amplias facultades á una
comision de accionistas para
llevar á cabo el arreglo con la
Municipalidad.

En instancia dirigida á la
misma hizo presente la comi-
sion el perjuicio que se segui-
ria á la comunidad de regan-
tes y al pais en general de
cumplimentarse en todas sus
partes la mencionada Real ór-
den pues de entregarse las
aguas del abasto público por
el barranco del Burgao, segun
aquella dispuso, no podría
aprovechar la Sociedad las
200 pajas que fluyen en la ga-
leria baja, cuyo usufructo pen-
saba adquirir, perdiéndose en
el mar una riqueza tan impor-
tante; por lo que suplicaba al
Ayuntamiento excogitase el
medio de conciliar todos los
intereses.

La Junta municipal en se-
sion convocada al efecto del
día 29 de aquel mes, en vista
de las manifestaciones de la
Compania, y teniendo en
cuenta, entre otras considera-
ciones, que las aguas de la ga-
leria baja, dada su poca altu-
ra, no podian dedicarse al
riego, y solo utilizarse en el
abasto de la poblacion, y que
lo que favorecia á la empresa
y no perjudicaba á los intere-
ses locales debia tolerarse y
consentirse, acordó por una-
nidad acceder á lo solicita-
do por aquella bajo las condi-
ciones siguientes:

1.ª El Ayuntamiento per-
mitirá que la Sociedad entre-
gue el raudal de aguas que
fluye de la galeria baja (siem-
pre que no baje de 200 pajas)
por el acueducto, hoy sin uso,
del Municipio, y este las per-
cibirá en el callejon del Bur-
gao, garantizando dicha So-

ciudad la perpetuidad del ex-
presado volúmen por aquel
sitio, y cediendo el Ayunta-
miento á la comunidad de re-
gantes (solo para este uso y
dicho caso) aquel trozo de
acueducto.

2.ª La vigilancia, conser-
vacion y reparacion de la ex-
presada atarjea desde el calle-
jon del Burgao hasta la galeria
baja correrá á cargo de la So-
ciedad, sin que el Municipio
tenga que hacer ningun gasto
por ese concepto, ni para la
reedificacion de dicho trozo de
acueducto en todo ó en parte
si se destruye por la caída de
rocas ó por otra causa cual-
quiera natural ó fortuita, aun-
que expresamente no se men-
cione.

3.ª La Sociedad canalizará
de su cuenta las aguas de la
galeria baja desde las nacies-
tes hasta el acueducto del Mu-
nicipio, reparándolo y cu-
briéndolo desde aquel punto
hasta el callejon del Burgao á
fin de que reúna las condicio-
nes de limpieza, higiene y sa-
lubridad indispensables para
el servicio del vecindario, sin
que la Sociedad pueda desti-
nar las aguas á otro uso que
al abasto público.

4.ª Si por cualquier acci-
dente se interrumpiese el cur-
so de las aguas desde el ex-
presado callejon hasta las na-
cienes de la galeria baja, la
Sociedad tendrá la ineludible
obligacion de poner sin de-
mora en el acueducto del Mu-
nicipio 215 pajas de agua de
las que corren por su atarjea
y salen por la galeria alta (en
donde están las que corres-
ponden al pueblo), las que pro-
visionalmente y mientras la
Sociedad repara la interrup-
cion correrán por el punto que
ambas partes crean mas con-
veniente, y que se ha de desig-
nar antes de celebrarse este

contrato. Si hubiese negligencia en el cumplimiento de esta
condicion, el Municipio podrá
de oficio poner corrientes las
aguas por medio de zanjas,
por el pasaje que de antemano
ha de señalarse, á fin de que
el pueblo no esté privado ni
por un momento de un articulo
tan indispensable para la
vida.

Y 5.ª Si en algun tiempo la
Sociedad no pudiere ó no le
conviniere entregar el raudal
de aguas que fluye de la gale-
ria baja, en ambos casos ten-
drá que dar 215 pajas de agua
de la galeria alta por medio
de acueducto cubierto que
construirá por el callejon del
Burgao, desde su atarjea has-
ta la del pueblo; y el Ayunta-
miento renunciará para siem-
pre el derecho que pueda asis-
tirle á exigir de dicha Socie-
dad mayor raudal de aguas.
Si la Sociedad no cumpliera
sin demora con esta condi-
cion, el Municipio podrá cons-
truir de oficio, y á costa de
aquella, el mencionado acue-
ducto por el callejon del Bur-
gao.

La Comision provincial opi-
na que procede aprobar el
contrato por considerarlo equi-
tativo y ventajoso para ambas
partes.

Remitido el expediente á in-
forme de la Seccion con Real
orden de 24 de Noviembre úl-
timo, nada tiene que observar
de verdadera importancia acer-
ca del proyectado contrato.

En él aparecen bien afianza-
dos los derechos é intereses
del Municipio del Puerto de la
Cruz, previéndose todas las
contingencias que en la ejecu-
cion del contrato pudieran
surgir, y dándole una solucion
útil y conveniente á los inte-
reses del comun.

Aunque el expediente no cons-
ta que se haya hecho el análi-

sis de las aguas, ni la altura que tienen las de la galería baja circunstancia que hubiera sido del caso comprobar para demostrar que en ninguno de esos conceptos se perjudica al vecindario con el cambio de dichas aguas por las de la galería alta a que el pueblo tiene derecho, como esta división puede subsanarse fácilmente, bastaría en sentir de la Sección que antes de otorgarse en la escritura se justifique que las aguas tienen buenas condiciones potables, y la altura conveniente para elevarlas, si fuera preciso, a los pisos de las casas.

Hecha esa constancia y especificándose por cuenta de quién han de ser los gastos de escritura, registro, impuesto de derechos reales (si se devengasen) y demás, la Sección entiende que puede V. E. conceder al contrato su superior aprobación.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, remitiéndole adjunto el expediente de referencia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Febrero de 1878.—Romero y Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de Canarias.

Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Bonastre contra un acuerdo de esa Comisión provincial, revocatorio de otro tomado por el Ayuntamiento de esa capital, que acordó la permuta de un terreno de la propiedad del recurrente por otro procedente del desvío del torrente de *El Pecat*, la Sección de Gobernación de ese alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente promovido por D. Antonio Bonastre contra un acuerdo de la Comisión provincial de Barcelona, que declaró nula la permuta que hizo de cierto terreno el Ayuntamiento de la capital.

En 27 de Febrero de 1873 expuso el reclamante al Ayuntamiento que poseyendo un edificio situado en las calles del pasado de San Juan y de Caspe, junto al torrente de *El Pecat*, y deseando edificar en la parte que comprende el mencionado torrente, se le adjudicará el trozo colindante á su propiedad; para lo cual, entre varios medios, propuso una permuta por otros terrenos suyos de igual superficie que habian de formar vía pública, y por los que debía ser indemnizado.

De conformidad el Ayuntamiento con lo informado por una comisión del mismo y el Arquitecto municipal, y á pesar de la oposición que formuló la razón social *Vidal é hijos*, acordó llevar á cabo la permuta con la condición de que no se entorpeciera el curso de las aguas hasta que se verificara el desvío del torrente y que se procediera al avalúo.

Aceptada el acta de valoración que levantaron los peritos se redactó la escritura de permuta; y previo informe de Le-

trado, se elevó á documento público ante Notario, inscribiéndose despues en el Registro de la propiedad.

Vidal é hijos, continuando la oposición que habia formulado, solicitó que se sacara á pública subasta el trozo del torrente objeto de la permuta, ó que se adjudicara á dicha razón social con preferencia á Bonastre, alegando que debía declararse la nulidad del acto por haberse infringido las leyes civiles y administrativas, tanto á causa de no poder ser la cosa objeto de contrato, cuanto que para llevarlo á efecto no habia sido aprobado por la Superioridad ni celebrádose subasta pública.

Pasado el expediente á informe del Letrado Asesor del Ayuntamiento, opinó que no procedía declarar la nulidad del contrato, fundándose en varias consideraciones que, aceptadas por aquel, desestimó la pretension de *Vidal é hijos*.

Esta razón social entabló recurso ante la Comisión provincial pidiendo que se prohibiera la inscripción de la escritura en el Registro de la propiedad, y que se declaran nula la permuta, así como también que se ordenara al Ayuntamiento que adjudicase á los reclamantes el terreno en concepto de parcela.

La Comisión provincial, considerando que el terreno del cáuce era inalienable por no estar en el dominio de los hombres, acordó revocar el acuerdo del Ayuntamiento, dejando expedita la acción procedente para pedir la anulacion de la escritura si se lastimaban derechos civiles.

Trasladado este acuerdo á la corporación municipal, lo aceptó y resolvió no acudir en alzada; mas no así el interesado Bonastre, que la entabló ante el Ministerio del digno cargo de V. E.

Antes de emitir su parecer sobre el asunto, la Sección considera necesario declarar que el terreno de que se trata no puede ser tenido como parcela ó sobrante de la vía pública, pues á ello se opone la naturaleza de su procedencia.

Esto sentado, observa la Sección que el Ayuntamiento de Barcelona acordó celebrar un contrato de permuta de dicho terreno con otros de D. Antonio Bonastre. Tal acuerdo estaba dentro de la esfera de sus atribuciones como representante del Municipio y encargado de la gestión de sus intereses; mas para que fuera válido era indispensable que se cumplieran las prescripciones de la ley.

El art. 80 de la municipal, entonces vigente, y el 85 de la que rige en la actualidad, determinan que en los contratos de esta especie es necesaria la aprobación del Gobierno, previo informe de la Comisión provincial según la primera, y del Gobernador, oyendo á la misma Comisión, según la segunda.

El acuerdo, pues, del Ayuntamiento de Barcelona, que resolvió llevar á efecto el contrato de permuta, adolece de un vicio de nulidad, no por las razones que alega la Comisión provincial, que tampoco pudo aplicar leyes

seguir un procedimiento gubernativo para declarar la nulidad del contrato, sino por las que se dejan sentadas.

Por tanto la Sección, sin entrar en consideración alguna respecto á la validez ó nulidad del contrato, cuya resolución corresponde á los Tribunales competentes, es de dictamen que proceda dejar sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento para que se llevara á cabo aquél sin aprobación previa del Gobierno, desestimándose en consecuencia el recurso interpuesto, y quedando á salvo los derechos de que se crean asistidos los interesados para pedir ante quien corresponda la nulidad del contrato y la cancelación de la escritura y de su asiento en los libros del Registro de la propiedad.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S., con devolución del expediente de referencia, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Febrero de 1878.—Romero y Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de Barcelona.

(Gaceta núm. 79.)

Por la Sección de Gobernación del Consejo de Estado se ha emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Salvador Valdeolmillos contra un acuerdo de la Comisión provincial de Palencia sobre abonos de honorarios por razón de visitas hechas á enfermos pobres de Torquemada.

Resulta que el interesado aceptó en 6 de Mayo de 1863 la plaza de Médico titular del indicado pueblo, la cual con arreglo al contrato sirvió hasta 1869 con la dotación anual de 100 escudos y la obligación de asistir á 50 familias pobres según parece que se anunció en el Boletín oficial, ó 55 según resulta de la lista que obra en el expediente. En éste se hace mérito de haber reclamado varias veces el interesado que se le aumentase el número de familias clasificadas como pobres, y al propio tiempo la dotación, y de haber sido denegadas sus solicitudes por los diversos Ayuntamientos que se sucedieron en la citada época.

Terminado el tiempo del contrato recurrió Valdeolmillos al Gobernador de la provincia con fecha 28 de Enero de 1870, manifestando que si bien su obligación estaba circunscrita á la asistencia de los 50 pobres expresados en la relación que se le entregó, era lo cierto que ninguna de las Corporaciones municipales que se sucedieron habia cumplido con exactitud las prescripciones de la ley de Sanidad de 1855 y de los reglamentos de partidos médicos

de Noviembre de 1864 y de marzo de 1868, porque constando población de mas de 700. vec. debió reputarse como partido de primera clase, clasificando en pobres á 200 familias, y señalando en su consecuencia al médico la dotación de 4.000 reales; de esta falta le habia ocasionado tener que visitar á un número menor de pobres que reclamaron su asistencia; que fenecido el contrato era justo se le abonaran las asistencias devengadas desde que aquella principió á regir hasta su terminación, á cuyo efecto presentaba unidas las cuentas y las declaraciones de los individuos que reclamaron la asistencia según las cuales fueron 2.211 las visitas, y su importe el de 11.151 pesetas; solicitando en vista de todo ello que dicha Autoridad mandara unir al expediente lista de los enfermos que fueron socorridos con medicamentos de la Beneficencia desde 1863 á 69, y que pasara despues todo á la Diputación para que dispusiese de dicha cantidad.

La Diputación provincial, previo informe del Ayuntamiento, no sin que el interesado dejase de protestar de este trámite y del dictamen emitido, desestimó en 10 de Agosto de 1876 la reclamación de D. Salvador Valdeolmillos, reservándole su derecho para que reclamase de los particulares los honorarios de sus visitas; fundó este acuerdo en que Valdeolmillos no estaba autorizado para declarar que vecinos debían ser considerados pobres, ni para visitar en tal concepto mas que á los comprendidos en la lista que le entregó el Ayuntamiento, y que si asistió á los individuos que dice, lo hizo de cuenta propia; que á la mayor parte de los sujetos que incluye en sus listas les ha cobrado sus derechos entablando al efecto juicios verbales; y por último, que el contrato estuvo en vigor desde 1863 á 69, y que con arreglo á él se le pagó lo estipulado.

Contra esta resolución ha interpuesto el interesado recurso de alzada para ante el Gobierno, insistiendo en que los diversos Ayuntamientos que han funcionado no tuvieron en cuenta al hacer el contrato la ley de Sanidad ni el reglamento de partidos médicos para designar el número de familias pobres y fijar la dotación del Facultativo; que habiendo autorizado la Junta de Beneficencia, de la cual eran Vocales el Alcalde y dos Regidores del Ayuntamiento, la asistencia facultativa y las recetas, debia satisfacer la Municipalidad los honorarios de las visitas en concepto de servicio extraordinario prestado á pobres excedentes de los 50 á que estaba obligado, á expen-

sas de los mismos fondos con que se pagó al Farmacéutico.

Como se ve, el recurso de que queda hecho mérito se funda esencialmente en haber tenido que asistir el interesado a un número mas crecido de pobres que el fijado en la lista que el Ayuntamiento le entregó, irrogándole con ello un perjuicio en los derechos y obligaciones estipuladas en su contrato. Esto sentado, dedúcese desde luego que nada compete decidir al Gobierno, en este asunto, puesto que según el párrafo primero del art. 84 de la ley de 25 de Setiembre de 1863, compete a los Tribunales contencioso-administrativos el conocimiento y fallo de las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos celebrados con la Administración para toda especie de servicios y obras públicas del Estado, provinciales y municipales.

El Ayuntamiento de Torquemada contrató con Valdeolmillos la asistencia facultativa durante seis años bajo ciertas bases que el interesado aceptó, y si estas no transcurrieron cumplidas, ó bien ofrece duda su verdadera inteligencia, ó el contrato en su origen fué vicioso, en cualquiera de estos casos debió el interesado hacer valer sus reclamaciones en la vía contenciosa y no en la gubernativa, que no era la procedente.

Por este motivo, no entraría la Sección a examinar, como lo hace la Comisión provincial, si las papeletas presentadas por el reclamante se hallan escritas de una misma letra y algunas sin firma, ni se fijará tampoco en la circunstancia de reconocerse en ellas personalmente dadores los que recibieron la asistencia facultativa de Valdeolmillos, ni tampoco se hará cargo del acuerdo de la Junta municipal de Beneficencia de 13 de Julio de 1868, disponiendo que los enfermos que excediesen de los 50 comprendidos en la lista de pobres, podían ser visitados por cualquier Facultativo, el cual, ya fuese ó no el titular, sería remunerado con el estipendio que la Superioridad determinase y á expensas de los fondos que la misma considerase que debía contribuir al efecto; pues todos estos particulares sólo pueden y deben ser apreciados por Tribunales llamados á decidir las cuestiones que se ventilen sobre la inteligencia de este contrato.

Es de parecer, por tanto, la Sección:

1.º Que la Comisión provincial fué incompetente para conocer en la forma que lo hizo del recurso de alzada.

2.º Que nada corresponde al Gobierno resolver acerca de la reclamación de D. Salvador Valdeol-

millos, el cual podrá ejercitar su derecho donde y como proceda.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes, con devolución del expediente de referencia para los fines oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1878.—Romero y Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de Palencia.

(Gaceta núm. 182.)

Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de este alto Cuerpo ha consultado á ese Ministerio con fecha 16 de Mayo último lo que sigue:

Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de este Consejo ha examinado la demanda, de que acompaña copia, presentada por el Licenciado D. Pedro G. Garamendi, en nombre de D. Juan Casall y Areni, contra la Real orden expedida por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 30 de Junio de 1877 desestimando la reclamación interpuesta por dicho interesado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona, que hizo suya la fábrica del gas municipal, y porque aquella Corporación no había expuesto al público en la Casa Consistorial las cuentas municipales referentes á dicho asunto.

Resulta que, previa subasta pública, fué adjudicado á D. Eugenio Lebon y compañía el suministro del alumbrado público por gas en la ciudad de Barcelona, con arreglo al pliego de condiciones aprobado de Real orden en 25 de Setiembre de 1863, apareciendo entre estas condiciones la de que el Ayuntamiento podrá hacersuya la fábrica del gas mediante el pago de cierta suma; que esta fábrica debería construirse en sitio y forma determinada, y que las cuentas con el contratista del gas se expondrían al público antes de satisfacer á la empresa las cantidades que reclamase.

Que construida la fábrica dió principio la empresa en 1867 al suministro del gas, y posteriormente solicitó del Ayuntamiento que dando por cumplido el contrato se admitiera la fábrica mediante el pago de la suma estipulada con este fin:

Que D. Juan Casall, vecino de Barcelona, presentó al Ayuntamiento varios escritos denunciando faltas que á su juicio había cometido la empresa Lebon, y solicitando que no se le admitiera la fábrica, y por último, reclamó por que el Ayuntamiento no expuso al público en las puertas de

la Casa Consistorial las cuentas con la empresa del gas, así como las ocho piezas de que constaba el expediente para la admisión de la fábrica, poniendo estos documentos de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento:

Que en 26 de Junio de 1873 el Ayuntamiento de Barcelona tomó acuerdo resolviendo, entre otros particulares, dar por terminado el compromiso de la empresa Lebon y compañía; que procedía recibir á la misma la fábrica de gas, pasando á ser propiedad del Municipio, y entregar á la empresa la suma 3.392.397 reales que le restaba percibir:

Que D. Juan Casall se alzó ante la Comisión provincial del acuerdo del Ayuntamiento; pero la Comisión fundándose en que la cuestión propuesta era de carácter contencioso, resolvió no haber lugar á deliberar sobre la alzada de Casall:

Que este mismo interesado entabló recurso para ante el Ministerio contra el fallo de la Comisión, y el Gobernador de la provincia no elevó la solicitud en virtud de los mismos fundamentos aducidos por la Comisión; mas presentada directamente por Casall en el Ministerio, por Real orden de 7 de Marzo de 1876 fué atendida la reclamación del interesado; se dejaron sin efecto los acuerdos del Gobernador y Comisión provincial, y se devolvió el expediente para que se decidiera la cuestión suscitada:

Que en 9 de Marzo de 1877 el Gobernador de Barcelona resolvió desestimar el recurso de D. Juan Casall; y habiendo acudido de nuevo el interesado al Ministerio previa consulta de la Sección de Gobernación de este Consejo, recayó la Real orden de 30 de Junio de 1877, por la cual, en vista de que la reclamación de Casall se dirigía á la exposición de las cuentas y á la admisión de la fábrica de gas, se resolvió en cuanto á lo primero que puestas de manifiesto las cuentas en la Secretaría del Ayuntamiento, este había cumplido por su parte; y que no señalándose vicio alguno ni omisión de ley con respecto del acuerdo sobre la admisión de la fábrica de gas municipal como quiera que dicha admisión era efecto de un contrato celebrado con la empresa Lebon para un servicio del Municipio, solo ante la Administración en vía contenciosa podía discutirse si se habían cumplido las condiciones del contrato y el alcance que estas tuvieran para el propósito del interesado; concluyendo de todo con desestimar la instancia de Casall:

Que el Licenciado D. Pedro G. Garamendi, en la representación antedicha, acudió ante esta Consejo con demanda contra la Real

orden referida, y solicitando que se declarase nulo el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona tomado en 26 de Junio de 1873; que se mande á dicha corporación tramitar de nuevo el expediente sobre cumplimiento por parte de la empresa Lebon de las condiciones de su contrato, y que á la vez que se exhiba este expediente se fijen en los sitios públicos las cuentas con la empresa, ó que en el caso de que no se admita esta súplica, que dejando sin efecto la Real orden se devuelva el expediente al Ministerio para que resuelva en el fondo la reclamación á que se contrae:

Que pasada la demanda con sus antecedentes al Fiscal de S. M., fué este de parecer de que no debía ser admitida por que el actor no pretendía reivindicar derecho alguno nacido de acuerdo administrativo que hubiera sido vulnerado, si no que ejercitando una verdadera acción popular se proponía denunciar faltas que estimaba cometidas por el Ayuntamiento, como administrador del caudal del Municipio, cuando admitió como suya la ya referida fábrica, y tales fundamentos no pueden servir de base al procedimiento contencioso.

Visto el art. 25 de la ley de Ayuntamientos, que concede á todos los habitantes de un término municipal acción y derecho para reclamar contra los acuerdos de los Ayuntamientos, así como para denunciar y perseguir criminalmente á los Alcaldes, Regidores y Vocales de la Asamblea de Asociados en los casos, tiempo y forma prescrita por la misma ley y la especial á que se refiere el art. 77 de la Constitución:

Vistos los artículos 171 y 177 de la ley citada, según los cuales todos los que se estiman agraviados por los acuerdos de los Ayuntamientos pueden reclamar contra los mismos, y acudir en vía contencioso-administrativa contra las resoluciones del Gobierno en los casos en que la reclamación se hubiese instruido ante el superior jerárquico en el orden administrativo:

Considerando:

1.º Que la revisión en vía contenciosa de las resoluciones administrativas únicamente procede cuando por las referidas resoluciones se hayan podido lesionar los derechos de que un particular se crea ahistido:

2.º Que la instancia de don Juan Casall contra el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona, relativo á la admisión de la fábrica de gas de dicha ciudad, así como la queja por el mismo interesado presentada acerca del sitio en que se habían expuesto las cuentas con el contratista del servicio de alumbrado por gas, no se funda

en el supuesto agravio que con el referido acuerdo y forma de publicación se hubiera podido causar á los derechos propios del reclamante, pues este no fué parte en el contrato con Lebon y compañía, ni intervino en su celebracion; y por lo tanto, al tenor de lo prescrito en el art. 177 citado, la presente demanda carece de base sobre la cual pueda apoyarse:

3.º Que si bien en virtud del derecho que el art. 25 de la ley municipal reconoce á los vecinos D. Juan Casall pudo denunciar los actos del Ayuntamiento que segun su criterio merecieran reforma ó mayor exámen, esto no le autorizaba ni concedia personalidad legítima para acudir en via contenciosa contra la resolución del Gobierno que desestimó aquella denuncia:

La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal de S. M., entendiendo que no procede admitir la demanda de que lleva hecha referencia.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con lo propuesto en el preinserto dictámen, de su Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el de la Sala y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Junio de 1878.—Francisco Romero y Robledo.—Sr. Presidente del Consejo de Estado.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular.

El Excmo. Sr. Capitan general de Marina del Departamento de Cádiz, me manifiesta en comunicacion de 22 de Julio próximo pasado, que por el Sr. Coronel del primer regimiento de dicha Arma y Departamento, se remitió en 2 de Diciembre de 1876, con direccion al Alcalde de Souto, en esta provincia, un oficio en el que se incluían una letra del Giro mutuo y sello de franqueo por valor de 79 pesetas 65 céntimos para entregar á Manuela Fernandez, en calidad de alcances de su difunto hijo Ignacio Dominguez Vazquez, soldado que fué del extinguido batallón del Cuerpo, á cuya comunicacion aun no ha contestado dicho Alcalde.

En su virtud, y como quiera que aunque en esta provincia no existe ningun Ayuntamiento con el expresado nombre de Souto, aparecen no obstante varios pueblos ó parroquias así denominados y pertenecientes á distintos distritos, he dispuesto que los Sres. Alcaldes en cuyos municipios radique alguno, me manifiesten á la mayor brevedad si han recibido el mencionado pliego y el destino que en su caso se le haya dado.

En caso negativo lo pondrán tambien en mi conocimiento sin demora para los efectos que correspondan.

Orense 2 de Julio de 1878.

El Gobernador.

BARTOLOME MOLINA.

TERCERA SECCION

GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Don Alejandro Torres Arias, Comandante fiscal del primer batallón del regimiento infantería de Cuenca, núm. 27.

Ignorándose el paradero del soldado de la primera compañía del expresado batallón y cuerpo, Tomás Alonso Araujo, á quien estoy sumariando por el delito de desertion; y usando de la jurisdiccion concedida por las Ordenanzas del Ejército, por el presente segundo edicto cito, llamo y emplazo al referido soldado, señalándole el cuartel del Sur de esta plaza para que se presente personalmente dentro del término de 20 dias, contados desde esta fecha, á fin de que preste su declaracion indagatoria; en el concepto que de no presentarse en el plazo prefijado se le seguirán los perjuicios á que haya lugar, sin mas llamarle ni emplazarle por estar así mandado por S. M.

Y para que luego á conocimiento de todos, se publica este edicto en el Boletín oficial de la provincia de Orense.

Santona 17 de Junio de 1878.—Alejandro Torres.

QUINTA SECCION.

AYUNTAMIENTOS.

Rubiana.

El proyecto de presupuesto de gastos é ingresos para el año económico de 1878 á 79 se halla de manifiesto en la Secretaría de Ayuntamiento por el término de quince dias, contados desde esta fecha. Lo que se hace público á los efectos de la ley.

Real 26 de Junio de 1878.—El Alcalde, José Barrio.

Villameá.

Declarada vacante la Secretaría de este Ayuntamiento con la dotacion de 2.500 reales, todas las personas que quieran aspirar á ella pueden presentar sus solicitudes documentadas dentro del término de quince dias, desde que tenga publicidad este anuncio en el Boletín oficial de la provincia.

Villameá Junio 29 de 1878.—El A. P., Camilo Arnesto.

Puebla de Trives.

El repartimiento de inmuebles de este Ayuntamiento que ha de regir para el año económico corriente, se halla de manifiesto en la Secretaría del mismo por término de ocho dias, á contar desde el en que tenga lugar la insercion de este anuncio en el Boletín oficial, para que los interesados puedan enterarse de sus cuotas y pro-

ducir las reclamaciones procedentes, respecto ha si la aplicacion de las mismas está conforme con la riqueza imponible con que figuran en el padron cuya publicidad se anunció.

Puebla de Trives y Julio 1.º de 1878.—El Alcalde, José Gonzalez Vazquez.

SETIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Por el Sr. Juez de primera instancia de este partido, en providencia del dia 5 del corriente, dictada en causa contra Juan Veloso Peijó sobre mutilacion para eximirse del servicio militar, se acordó recibir declaracion al Médico D. Felipe Lozano; y como no fuese habido y se ignora su paradero, por otra providencia del 26 del actual, se acordó citarlo por medio de la presente cédula para que en el término de diez dias siguientes al de su insercion en el Boletín oficial de esta provincia y Gaceta de Madrid, se presente en este Juzgado á declarar, bajo la multa de 25 pesetas si no lo verificase. Y para que dicho sugeto sea citado en forma, segun lo prescrito en la ley de Enjuiciamiento criminal, expido la presente cédula que firmo en Ginzo de Limia á 28 de Junio de 1878.—Camilo Carballo.

Don Francisco Mosquera, Juez de primera instancia de Ginzo de Limia.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuela Valencia, Jesús Garrido, Manuel Suarez y Juan Antonio Martinez, vecinos de Castelaus, Ayuntamiento de Calbos de Randín en este partido, para que dentro del término de treinta dias, á contar desde su insercion en la Gaceta de Madrid, se presenten en este Juzgado á responder de los cargos que contra ellos resultan en la causa que me halló instruyendo sobre coacciones y amenazas graves dirigidas al Cura de dicho Castelaus; en la inteligencia de que trascurrido dicho término sin verificarlo, les parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Ginzo de Limia á 1.º de Julio de 1878.—Francisco Mosquera.—D. O. de S. S., Ramon Cadorniga.

ANUNCIOS.

A LOS SRES. ALCALDES.

En la imprenta de este periódico oficial, calle de Colon número 16, se despacha el papel para la confeccion del reparto de la contribucion de consumos, como igualmente los recibos talarionarios para el cobro de dicho

impuesto, al infimo precio de 3 reales ciento.

Los Sres. Alcaldes que tienen hechos sus pedidos pueden mandar recogerlos; y los que nuevamente deseen hacerlo se servirán avisar en tiempo oportuno.

LA BURSÁTIL

MADRID:

RELATORES, 26, PRINCIPAL DEBENGA.

Compra al contado y á los mas altos precios de Valores Públicos, 27 1/2 de Bancos y Sociedades; de Doses de 29 á 31 por 100 y Treses; Personal; Ferro-carriles; Caja de Depósitos; Bonos del Tesoro; Cupones y Carpetas de intereses y de Inscripciones de Ayuntamientos; Riquisa y del Empréstito de 175 millones; Recibos al 26; nueve Décimos y Residuos al 29 y títulos completos al 32 por ciento.

Préstamos sobre valores al 6 por ciento anual.

La correspondencia se dirigirá al Gerente de *La Bursatil* y los valores en certificado, para reembolsar su importe.

¡NUNCA SE COSE A MANO!

LAS LEGÍTIMAS MÁQUINAS

"SINGER"

hacen, sin esfuerzo de quien las trabaja, mucha más costura; mas ligera y perfecta, en mucho menos tiempo que cualquier otra.

SE VENDEN Á PLAZOS

desde 10 REALES semanales.

Así, cuando se paga un plazo de la máquina, esta ha dejado ya al interesado una utilidad muchas veces mayor que la ganancia desembolsada.

MÁS DE 2.000 CASAS

ESTABLECIDAS EN EUROPA SOLAMENTE, para la venta de estas renombradas máquinas garantizadas.

"SINGER"

para modistas, corseteras, sastres, guarnicioneros, zapateros, fabricantes de camisas, cuellos, paños, corsets, cortes de botinas, guarnecedoras, y para toda persona, en fin, que necesite coser cualquier cosa y en cualquier forma.

Pléanse Catálogos ilustrados, con listas de precios y las condiciones de venta á plazos, en el

DEPÓSITO DE ORENSE.

50, PAZ, 50.

GLOBOS.

GRAN BARATO.

En el establecimiento de Manuel Diz, situado en la plaza del Trigo núm. 4, se hallan de venta globos de cinco y ocho cuartas de largo, de papel de seda, á 6 y á 10 reales uno, de todos colores con cola de fuego.

Los hay de cuatro y de seis varas á 30 y á 50 reales; de papel de color; se admiten encargas para grandes; se venden tambien los portugueses.

ORENSE: POR DE J. M. RAMOS